Globethics Repository

Perú [Peru]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Escobar La Cruz, Ramiro
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-03 20:17:57
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218835

Perú: de la incertidumbre al escándalo (y viceversa)

Ramiro Escobar La Cruz

El fin de 2003 coincidió en el Perú con la mitad del periodo presidencial de Alejandro Toledo, pero también con una crisis política muy seria, que terminó con la renuncia de la primera ministra Beatriz Merino, y que estuvogatillada más por inconfensables apetitos de poder que por una estrepitosa situación económica. Curiosamente, esto ocurrió cuando el mandatario señalaba, en positivo, que su administración se acercaba a un «punto de quiebre». El presente artículo explica las dimensiones internas y externas de esta crisis, y por qué puede agudizarse hasta provocar, a mediano plazo, desenlaces imprevisibles.

Casi a la medianoche del lunes 8 de diciembre de 2003, el congresista Luis Solari se presentó en *La boca del lobo*, un sintonizado programa de televisión y, contrariando su flemático estilo, exhibió unas inusitadas fauces políticas. Amenazó con enjuiciar a Guillermo Gonzales Arica, un controvertido asesor del presidente Alejandro Toledo, y dijo que, desde ese preciso instante, «cortaba sus relaciones con el Palacio de Gobierno».

Ese día era feriado en el Perú, debido a la fiesta de la Inmaculada Concepción, pero tras varias semanas de escándalos no parecía quedar en el país un solo político impoluto. Solari, expresidente del Consejo de Ministros y dirigente de Perú Posible (PP), el partido del presidente, se defendía así de una acusación nada elegante: haber ido donde el arzobispo de Lima con maledicencias sobre Beatriz Merino, su sucesora.

Ramiro Escobar La Cruz: periodista peruano, columnista del diario *Perú 21*, Lima; colaborador del diario *El País* (España) y de las revistas *GEO* (España) y *Gatopardo* (Colombia).
Palabras clave: situación y proceso políticos, cultura política, Gobierno, Perú.

Intrigas pala-ciegas

¿Cuáles eran esas maledicencias que, supuestamente, Gonzales Arica filtró a la prensa sin piedad? Increíblemente, la versión sostenía que Solari había llevado, o hecho circular, por las oficinas del arzobispo Juan Luis Cipriani (único cardenal del Perú y miembro del Opus Dei) y de Rino Passigato, el nuncio apostólico, la ficha de propiedad de la casa de Merino. El pecado: la copropietaria era otra mujer. Irma Chonati, asesora de la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) y vieja amiga de la actual premier, no solo compartía con ella la propiedad sino que vivía en el mismo recinto. Así, entre las rendijas de otra supuesta acusación (que ingresó a la Sunat con ayuda de Merino, ex-directora del organismo), se filtraba la beata e inconfesable sospecha de que ambas eran lesbianas.

Ridículo, trasnochado, alucinante, pero cierto. No en el sentido de haberse comprobado (cosa por lo demás irrelevante, incluso para otros obispos más sensatos) sino en el sentido de haber enrarecido el ambiente político de manera infame. En rigor, la denuncia de que Merino había favorecido a su amiga, y a algunos de sus parientes, tenía sustento, pero estaba inevitablemente envuelta en una homofobia rampante.

¿Qué pasaba en el Perú para que el destino de la primera ministra se jugara por esta suerte de intrigas de confesionario? En realidad, la arremetida contra ella venía desde más atrás y por motivos bastante menos celestiales. A diferencia de sus dos predecesores (el mencionado Solari y Guillermo Dañino, un abogado de prestigio en Washington), Merino gozaba de una popularidad mucho mayor que la del primer mandatario. A Toledo eso no parecía preocuparlo *in extremis*, pero sí a buena parte de su bancada y sobre todo al Frente Independiente Moralizador (FIM), grupo aliado de PP y comandado por el actual embajador del Perú en España, Fernando Olivera. Las zancadillas a la premier, según cada vez hay más indicios, venían de la misma entraña de la alianza gobernante. Y de algunos extraños consejeros del despistado presidente.

Una de las ecuaciones políticas, absurda e infantil, pero al parecer vigente era la siguiente: si la popularidad de Merino continuaba, se perfilaba como potencial candidata para 2006. Por añadidura, como ella no pertenece a PP, la militancia de esta especie de pálido grupo de interesados que sigue al mandatario no la veía con buenos ojos. Se estaba robando, según este ciego punto de vista, avemarías ajenas. Es una posible interpretación de lo que ocurrió con Merino, ya renunciada, pero no la única ni acaso la más certera. Más al fondo, en el sustrato del iceberg de intrigas que amenaza hoy la estabilidad política del país, hay varios laberintos más, que conducen al pasado, remoto y cercano, y al presente tor-

mentoso, y que están minando el futuro político y social muy peligrosamente.

Impuestos, tributos y cabes

En líneas generales, la situación económica del Perú no es desastrosa, no se ha «argentinizado». La administración de Toledo ha manejado ese delicado ámbito de la política, y la vida cotidiana de la gente, con cierta responsabilidad. No hay hiperinflación, ha habido un crecimiento importante del PIB en lo que va de gobierno (hasta 3%, algo curioso en América Latina) y las exportaciones han crecido unos cuantos puntos. El problema, sin embargo, sigue siendo la espantosa desigualdad que agobia al país, la misma que no mejora por la pura salud de las estadísticas o indicadores. Al menos 40% de la población se mantiene por debajo de la línea de pobreza, la sanidad pública no mejora sustancialmente y la mayoría de sueldos son, por decir de algún modo, de fantasía. Es extraño el peruano que viva gordo y feliz con una sola remuneración.

La estrategia del actual gobierno para enfrentar este drama –que por cierto también tiene raíces seculares– ha consistido en buscar la estabilidad macroeconómica, fortalecer algunos programas sociales e introducir ciertas reformas. Una de ellas, con la que estaba fuertemente comprometida Merino, era la reforma tributaria, urgente en un país donde la presión a los contribuyentes casi alcanza apenas 14%. No parece casual, por eso, que los embates contra su gestión hayan surgido cuando, gracias a facultades extraordinarias que le fueron otorgadas al Poder Ejecutivo, los cambios tributarios comenzaban a asomar la nariz. Una de las medidas, por ejemplo –que se discute aún al cierre de estas líneas–, era la puesta en vigencia de un impuesto de 0,15% a casi todas las transacciones bancarias. Algo que hizo alborotar el avispero.

Una iniciativa como esta es candidata a la impopularidad, incluso antes de nacer. Asusta al tímido ahorrista como al inversionista voraz. La pregunta que hay que hacerse, no obstante, es si un país en las condiciones del Perú tiene otra forma de neutralizar, aunque sea suavemente, la dramática desigualdad en la que habita. Si no hay una revolución, el único instrumento a la mano es subir la temperatura tributaria. Merino en la Sunat y después en el premierato, había intentado hacer eso. Pretendía ampliar la base tributaria y en cierto modo formalizar al menos la actividad económica (se calcula que en el Perú la actividad económica formal apenas llega a 25%). No aspiraba a «europeizar» la tributación peruana, lo que sería suicida, sino simplemente procurar una cierta, mínima, coherencia entre el Estado y la realidad. No solo no lo logró sino que terminó fuera del cargo. ¿Tuvieron que ver las intrigas homofóbicas con la rabieta que provocó en las grandes empresas y

entidades bancarias el mencionado proyecto de impuesto? No se puede estar del todo seguro, aunque como especula el semanario *Caretas*, es probable que en la lista de francotiradores contra Merino estuviera gente ligada a estos sectores.

Al garete

Ciertamente, esas y otras pequeñas medidas no hacían verano[1], pero apuntaban a establecer algo que desde julio de 2001, cuando Toledo asumió, casi no había existido: un rumbo medianamente claro, un plan de administración y reforma del Estado. Hasta antes de Merino, los intentos de poner en marcha un verdadero programa de gobierno habían sido sinuosos, enrevesados, llenos de contradicciones. Lo sucedido por ejemplo en el Ministerio del Interior es revelador de esta tendencia regresiva y con frecuencia autodestructiva. Fernando Rospigliosi primero y Gino Costa después, dos ministros de Toledo que estuvieron a cargo de esta cartera, llevaron a cabo una profunda reforma de la Policía Nacional, en un país donde la delincuencia de todo tipo y la misma corrupción policial se han convertido en un gordo problema. Como ambos no eran hombres de partido, los militantes de PP comenzaron a presionar para que salieran. Por fin, Costa tuvo que dejar el cargo para ser reemplazado por Alberto Sanabria, un dirigente de PP cuyo único mérito había sido ser presidente de un club campestre. La reforma policial prácticamente se detuvo, atenazada además por denuncias contra el nuevo ministro, quien parecía tener más de un asunto por aclarar. Tiempo después, debido a la inminencia de un escándalo administrativo relacionado con Sanabria, Rospigliosi volvió al Ministerio. Recién entonces se pudo retomar la reforma.

Una situación parecida se ha vivido en el Ministerio de Defensa, donde el anterior ministro, Aurelio Loret de Mola, se vio obligado a anunciar públicamente que el dinero no le alcanzaba. Tras el cambio de gabinete producido por la salida de Merino, fue reemplazado por el general en retiro Roberto Chiabra, ex-comandante de las Fuerzas Armadas, aunque Toledo siempre sostuvo que a esta cartera iría un civil.

El colmo de esta tendencia a dejar casi todo al garete se evidenció hacia el 19 de diciembre, cuando Nidia Puelles, otra militante de PP, renunció al Ministerio de la Mujer apenas cuatro días después de haberse juramentado junto a los nuevos ministros. La razón, serias acusaciones de corrupción en su contra. El remedio, el retorno al Ministerio de Ana María Romero, que ejerció la cartera hace un año, sin pena ni gloria. Salvo en el ámbito económico,

1. Si bien el aumento, y el reordenamiento, de la tributación era una medida necesaria, el uso de los fondos que de allí provendrían no iba a ser de por sí sensato. Una de las hipótesis que se maneja, hasta ahora, es que es el único recurso del Gobierno para subir sueldos y evitar con ello una mayor impopularidad.

donde a pesar de todo se ha mantenido cierto equilibrio (o en Relaciones Exteriores, donde parece haber un plan), el resto de sectores del Estado flotan en esta especie de remolino jaloneado por apetitos partidarios o simplemente personales (llamar partido a PP sería una audacia mayor). O peor aun: hay una suerte de farandulización de la política, lo que ocasiona espectáculos lamentables.

La sombra del pasado

¿Qué ocasiona esta seria crisis de identidad política en el Perú? En medio del caudaloso torrente de acontecimientos actuales parecen haberse perdido de vista ciertas cosas. La punta del iceberg, como ya dije, conduce a profundidades más complejas. Una de ellas en mi opinión es que muchos peruanos –políticos incluidos– parecen estar poco concientes de que aún vivimos un «periodo de transición». Actuamos como si la historia no existiera. Mientras los actuales miembros de PP –y sobre todo de su aliado, el ya mencionado FIM, un grupo de actuación política sumamente controvertida– se debaten en intrigas infantiles, el poder que durante una década ejercieron Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos no termina de apagarse. Los juicios anticorrupción contra este último y sus cómplices han avanzado, mas no lo suficiente como para evitar la impunidad.

Más preocupante todavía es que algunos estilos que estuvieron en boga en ese periodo se han reproducido, de manera más tenue quizás, pero igualmente detestable. El actual gobierno no ha perdido, por ejemplo, la oportunidad de tener su pasquín periodístico que lo apoye. A la vez, toda esa afición por la intriga, que tantos réditos le dio a Montesinos, ha sido heredada por asesores palaciegos o congresistas casi bufones. Jorge Mufarech, un ex-ministro de Fujimori, es ahora parlamentario de PP y exhibe ramplonamente su lema «¡Fuera los corruptos!», a pesar de que él mismo tiene innumerables acusaciones de corrupción. Varias veces ha protagonizado incidentes penosos –atacando al procurador encargado del caso Montesinos, por citar un caso–, sin que Toledo lo haya llamado al orden o simplemente prescindido de él.

Por supuesto que el Gobierno siempre exhibe, como parte de su currículo, el haber tumbado a la dictadura, pero creo que el asunto escapa de la voluntad de una declaración. Montesinos creó una especie de síndrome, una sensación de que el juego limpio no rinde frutos, y nadó durante años en una tolerancia muy parecida a la complicidad. Era evidente que un sistema, un modo de pensar, lo cobijaba. Ese modo de pensar no se ha ido con él ni sus cómplices a la cárcel. Sigue flotando por allí, en las intrigas palaciegas y en los operísticos casos de corrupción que se han destapado en esta gestión, que no son monstruosos pero sí grotescos. La frivolidad del poder no ha sido exorcizada, ni la del Gobierno ni la de

la oposición, y por añadidura algunos cómplices directos de Montesinos continúan, orondos, en la actividad política. Las trabas para que avancen los procesos anticorrupción suelen bloquearse por la actitud sospechosa de algún juez. Hace poco, Rosa María Palacios, una conocida periodista de televisión, descubrió un micrófono colgado de un poste cercano a su vivienda que, todo indica, tenía el propósito de espiarla telefónicamente, como en los viejos tiempos. No hemos transitado, en suma, a un estadio político distinto.

Nelson Manrique, notable historiador peruano, recientemente hizo una interesante observación. Sugirió que las intrigas que produjeron la caída de la primera ministra no eran nuevas en nuestra vida republicana, pero tenían un ingrediente adicional: no se debían a disputas ideológicas, o de programa, como antes, sino a peleas por cuotas miserables de poder, en la medida que la política misma se había vaciado.

Oscuras opciones

En medio del mare mágnum de intrigas y mediocridad, que ahogan una mínima sensatez tanto en el Gobierno como en la oposición, dos opciones políticas preocupantes van ganando terreno. Una es el retorno del ex-dictador Fujimori, quien aparece con 14% de presunta intención de voto en una encuesta reciente, detrás del ex-presidente y líder del APRA Alan García Pérez, quien tampoco es un santo varón. Más abajo, con apenas 6% en las encuestas pero con cada vez más presencia en las calles, se ubica Antauro Humala, ex-oficial del ejército que, junto con su hermano Ollanta, protagonizó en 2001 una breve asonada militar sin mayor trascendencia en contra de Fujimori y la cúpula militar. Las banderas de Humala son violentamente novedosas: fusilar públicamente a los corruptos y «globalizar la guillotina». Acabar, según sus propias palabras, con el «amariconamiento» de los políticos y de algunos militares. Todo eso, por supuesto, envuelto en el papel de regalo del «etnocacerismo»[2], galimatías ideológico lamentable, pero atractivo para un vasto sector de la población debido a que critica, ferozmente, el racismo inmisericorde que sobrevive en el Perú. Humala, para más señas, es un golpista orgulloso y declarado.

¿Hay posibilidad de que un sujeto de esta laya asuma el poder en el país? Muy poca, pero de todas maneras no debería descartarse su emergencia como potencial caudillo de esperanzas diezmadas. Al igual que las latentes simpatías por Fujimori, representa, como anotaba Manrique, la oquedad

2. Humala ha inventado este término juntando las palabras «etnia» y «cacerismo»; con esta última alude a Andrés Avelino Cáceres, general que resistió fuertemente la ocupación chilena en la Guerra del Pacífico (1879-1883) y que era quechua hablante. El mismo general, sin embargo, más tarde resultó decepcionante como presidente.

Nuestro lugar en el tablero

Alejandro Toledo es un hombre que sintoniza, casi automáticamente, con Washington. De acuerdo con él mismo, es amigo del presidente George W. Bush, un buen pagador de la deuda externa –que asciende a 21.800 millones de dólares (tema casi tabú en la actual administración)–, acepta sin remilgos las gentiles sugerencias del FMI, y tuvo una opinión brumosa cuando se produjo la invasión a Irak.

Más aún, hace algunas semanas protagonizó una poco elegante huida del G-21, el grupo que Lula y otros líderes están promoviendo para contrarrestar la unipolaridad, económica y política, de Estados Unidos. Actualmente procura llegar, siguiendo el sendero marcado por Chile y México, a un TLC con el gran país del Norte, teniendo un «sólido argumento»: que nuestras exportaciones a EEUU representan 0,05%.

En ese punto, hay una cierta distancia entre la Cancillería, de tradición más bien integracionista, y el Ministerio de Comercio Exterior, de corte más bien neoliberal, que apuesta por el TLC. El Perú está inserto en un proceso que busca conseguir este tratado con EEUU, pero hay fuertes resistencias en el tejido social más que en el político. Una de las grandes observaciones es justamente haberse desmarcado del Brasil, que lidera más bien una posición conjunta.

Desde un prisma geopolítico, además, una convulsión social en el Perú no es en modo alguno conveniente para el ajedrez norteamericano. El piso ya está movido en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, como para que se genere otro foco de tensión en estas tierras. Aun así, la política de EEUU frente al problema de la coca y el narcotráfico sigue siendo errada. Insiste en la interdicción y no considera los otros múltiples usos de la hoja sagrada de los Incas.

Esta tendencia, según los más pesimistas, apunta a que el Plan Colombia sea exportado también a este país. Recientemente incluso ha habido versiones de la presunta presencia de las FARC en territorio peruano. No hay pruebas palmarias de ello, ni tampoco de que vaya a haber más presencia militar norteamericana en nuestro territorio. Lo que sí parece evidente es que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo una ventana para los intereses y el control de EEUU.

de lo político y la aparente tabla salvadora en un escenario en el cual la democracia se relaja peligrosamente. La llamada «clase política» parece ciega y sorda a la irrupción de estos fenómenos, como en el pasado fue inútil e inoperante frente a Sendero Luminoso. Nadie parece muy interesado en cuestionar esta forma de «hacer política» –basada en intrigas o intereses menudos– o el propio término «clase política», que de por sí es factible de ser entendido como una categoría que estratifica aún más a la ya dividida sociedad peruana.

Incluso García, quien suele ser lúcido y sagaz en muchos asuntos, retrocede cuando de reconocer sus errores se trata. Los disimula, los encubre, los obvia, como si su verbo florido lo liberara de sus desastrosas responsabilidades pasadas. Fujimori tiene un programa de radio que se emite todos los sábados. Allí pontifica por teléfono desde el Japón, con la impunidad de quien confía en

lo endeble de la memoria y las instituciones. A la derecha, Unidad Nacional (UN), grupo liderado por la ex-candidata presidencial Lourdes Flores juega también a la oposición, pero sin propuestas muy claras. Tiene, además, dos escuderos –José Barba y Rafael Rey– que se encargan de las intrigas y de las críticas a todo avance que tenga rostro social. Su último objetivo fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), contra la que dispararon calumnias sin piedad[3].

Hasta el próximo escándalo

Ciertamente, hay también zonas menos purulentas en la política peruana. El ex-presidente Valentín Paniagua, a pesar de su desafortunado distanciamiento de la CVR (que él mismo creó), sigue siendo considerado una persona respetable y presidenciable, así como Yehude Simons, presidente de la región Lambayeque[4], un ex-izquierdista injustamente preso durante muchos años y que hoy muestra un talante sensato y discreto.

El problema radica en cómo tender un puente entre representados y representantes o, mejor, cómo volver la política una actividad cercana, eficaz, no un antro que puede potenciar en el mejor hombre las inclinaciones más infames. Curiosamente, si algo estalla en el Perú –al modo de lo que ocurrió en Argentina o Bolivia– no será, al menos ahora, debido a una desastrosa economía sino al hartazgo de la vulgaridad. Ocurre que ésta nos persigue de manera implacable. El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, es un hombre políticamente más ducho, pero no libre de los devaneos del poder. Cuando fue presidente del Congreso contrató, con jugosos sueldos, a voluptuosas anfitrionas cuyo trabajo iba apenas un poco más allá de servir de adorno. Fue además durante años un notable parlamentario del gobierno de Fujimori.

La única esperanza, a mi juicio, consiste en adecentar la política de manera radical –no con discursos sino con decisiones y actitudes– y en entender, mínimamente, el proceso social que cunde por los Andes, costas y selvas del Perú, porque el fracaso de la clase política también anida allí, en su ignorancia de las necesidades reales y en la incapacidad de ver el conjunto

3. La CVR emitió en agosto de 2003 su Informe Final tras dos años de arduo trabajo. Allí dio cuenta de la dramática situación que se había vivido entre 1980 y 2000, debido a la guerra del Estado peruano contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. La investigación fue muy seria y rigurosa, y removió la conciencia nacional, pero también recibió arteros ataques, sobre todo de parte de los grupos de derecha. Barba y Rey estuvieron entre sus más feroces adversarios.

4. La regionalización es otro de los datos importantes para entender el momento político del Perú. Desde comienzos de 2003 las 25 regiones del país tienen un presidente elegido por voto popular, al cual se le van a ir transfiriendo cada vez más responsabilidades. Es un esfuerzo inicial hacia la descentralización, una urgencia nacional, que no ha estado exenta de dificultades. Hay por lo menos cinco presidentes regionales que tienen serios problemas con la justicia, incluso penal.

del problema, y no solo su miserable parcela.

El país viene dando tumbos desde hace tiempo, política y socialmente, con violencia y sin ella. Pasamos de la ferocidad de Sendero Luminoso al derrocamiento de Fujimori a punta de marchas y denuncias. Se vive un proceso de regionalización, que pretende descentralizar el enfermizo poder que ha acumulado Lima, mientras la pobreza y la exclusión siguen siendo un cáncer que carcome el futuro. Sin embargo, y como me comentaba hace poco Marcial Rubio, ex-ministro de Educación de Paniagua, sí existe un orden, o más bien un cúmulo de órdenes, surgidos de la entraña social, emergidos espontáneamente para evitar el caos total. Agregué que el gran drama nacional era que nadie interpretaba esos intentos caóticos de organización en un solo orden global, que respete, que busque consensos y acuerdos. Prueba de ello, tristísima, es que el Acuerdo Nacional, una de las pocas ideas del actual gobierno para hacer todo eso, es precisamente uno de los proyectos más estancados. Se trataba de sentar en la misma mesa, en busca de entendimientos básicos y planes mínimos, a casi toda la «clase» política, a los empresarios, a los sindicatos, a los líderes regionales. No era perfecto, pero al menos era un intento de curación. Sintomáticamente, ya ni se habla del tema. La política peruana ha vuelto a sus traumas y regresiones, como si en el fondo hubiera un demonio que estrangulara todo intento de lucidez. Mientras no lo exorcicemos, el futuro seguirá siendo un torneo por la cabeza del próximo ministro, un festival de denuncias y un chiquero de intrigas. Esperaremos sentados el escándalo que viene, bajo el signo de la incertidumbre y la pobreza.

Lima, diciembre de 2003